

El "pueblo" ha de tener el "derecho" de autodeterminación. Pero, ¿quién es, pues, el "pueblo"? ¿Quién es el poderoso, quién tiene el "derecho" de ser el representante legítimo del "pueblo" y de su voluntad? ¿Cómo se sabe lo que el "pueblo" quiere realmente? ¿Existe acaso partido político alguno que no sostuviera que él es precisamente el verdadero representante, en contra de todos los demás, de la "voluntad popular", y que todos los demás sólo expresan una voluntad popular deformada y adulterada? Todos los partidos liberales burgueses se consideran, por la naturaleza misma de las cosas, como la voluntad encarnada del pueblo, y aspiran al monopolio exclusivo de la representación del "pueblo". Pero es el caso que los partidos conservadores y reaccionarios se reclaman en no menor grado de la voluntad y los intereses del pueblo y, en cierto sentido, no sin menos derecho.

—Rosa Luxemburgo

Sergio Bagú
**Tres oligarquías, tres
nacionalismos: Chile,
Argentina, Uruguay**

1
A MODO DE INTRODUCCIÓN

No es nada fácil reconstruir la ideología de una clase ni, menos aún, su expresión nacionalista. Lo poco escrito en América Latina sobre algunos tópicos afines tropieza con dificultades inevitables y, en algunos casos, se mueve en el terreno de la imprecisión y de los sobreentendidos discutibles. La escasa elaboración de la metodología es una de las vallas que obstruyen el tratamiento afortunado de esta temática.

La clase tiene sus portavoces, pero no todo lo que éstos puedan decir corresponde a lo generalmente aceptado por ella. La clase tiene su concepción del mundo y de la dinámica de la sociedad, pero no todo lo que transmita al conjunto de la población en la forma de una ideología nacionalista forma parte de su propia concepción del mundo.

Tampoco todo lo que circula ostensiblemente en una sociedad, por los canales más institucionalizados, es necesariamente producto de la elaboración de una clase dominante. Lo que en rigor podríamos llamar ideología nacionalista correspondiente a una clase dominante es, al fin y al cabo, un instrumento de dominación y, a menudo, de lucha frente a otras clases. Su contenido puede coincidir, en alguna etapa, con la cosmovisión de algunos sectores populares amplios, pero no tiene ni su misma raíz ni su misma lógica.

La cita de los portavoces —el discurso parlamentario, el editorial del periódico, la interpretación del historiador, la opinión del empresario— es importante y, en cierto tipo de reconstrucción, puede llegar a ser justificadamente el único material que utilice el autor. Pero hay otros modos de reconstruir ese universo, generalmente limitado, de interpretaciones y proyecciones.

No dejamos de reconocer, como condición previa de este breve ensayo, que los otros modos de localizar una ideología de clase oscilan entre la tentación literaria y el ilimitado voluntarismo de las opiniones individuales. Nos referimos a la tentación de coordinar palabras sin mucho asidero en una realidad social. Quienquiera que afronte el tema, afronta también el riesgo. Sólo se lo puede esquivar cuando se comienza por tener idea clara del proceso histórico global en el que se inserta el fenómeno analizado.

En las circunstancias en que redactamos este trabajo, la información que pudiera servirnos de apoyo no nos es accesible. Pero como el proceso global nos es tan familiar y como, por otra parte, la necesaria brevedad del ensayo conduce a la única posibilidad de plantearlo como síntesis, en definitiva hasta es posible que el éxito nos acompañe, porque se trata aquí de reconstruir algunas grandes líneas paralelas en la historia casi contemporánea de tres sociedades latinoamericanas y cualquier intento de hacerlo a partir de documentos, pero en breves páginas, implica el peligro de alejarse de esas grandes líneas.

El tema mismo que hemos elegido sólo reconoce como antecedentes algunos esbozos hechos por varios autores para cada caso nacional. Lo cierto es que, encerrando un credo nacional en sus fronteras respectivas, su naturaleza histórica última no aparece con la misma nitidez que cuando el análisis se intenta en términos comparativos.

Aclaremos, desde luego, el significado de las palabras. En los tres países durante decenios se ha llamado *oligarquía* a un conjunto de familias, entre las cuales se encontraban las propietarias principales de la tierra de las regiones más cotizadas, que dirigían personalmente sus empresas rurales, o las usufructuaban, o bien arrendaban toda la tierra o parte de ella, sin perjuicio de que algunos de sus miembros practicaran también otras actividades económicas. Aceptamos la denominación popular porque en los tres países surge como fruto de la percepción clara de una situación clave. Hubo allí; en efecto, clases sociales de origen rural que dominaron los mecanismos económicos nacionales durante periodos prolongados.

Durante decenios, esas oligarquías controlan también el poder político de modo directo, o bien tienen fácil acceso a él cuando se trata de defender sus intereses económicos. En lustros más recientes, el panorama político se complica en los tres países por la presencia de otras clases en ascenso. Nuestro análisis se limitará a esta etapa, la cual, entre los últimos años del siglo XIX y la segunda guerra mundial, es común a los tres países, si bien en algunos comienza antes o se prolonga más allá de 1945.

Llamamos aquí ideología o credo nacionalista o nacionalismo a un conjunto de ideas, convicciones o valores —explícitos a menudo, aunque a veces no— con el cual se quiere sustentar el orgullo de lo supuestamente peculiar del país, que es a la vez un modo de identificarse frente a enemigos reales o potenciales. Ha habido por cierto otros nacionalismos, además del oligárquico, en esos mismos países; otros modos de expresar la coherencia nacional y de identificar enemigos. Pero nosotros nos queremos referir sólo a lo que es —o fue— pensado o reconstruido por una oligarquía dominante y trasvasado por ésta a los otros sectores de la estructura de clases.

LA CLASE Y LA PECULIARIDAD DEL SUSTRATO ECONÓMICO

Sobre casi todo el territorio nacional se extendió desde fines del siglo XIX el tipo de propiedad rural que sustentó a la oligarquía uruguaya. Cuando la estructura productiva fue evolucionando, las chacras de algunas zonas como Canelones dieron nacimiento a una incipiente clase media de productores de cereales, pero el suelo de muchas de esas chacras seguía siendo de propiedad de oligarcas latifundistas.

Sólo sobre la zona pampeana avanzó la propiedad de la oligarquía argentina. Pero aun dentro de esa zona, fue el suelo de la provincia de Buenos Aires —y, muy en particular, el que tenía pastos blandos de invernada— donde echó sus raíces esa clase, bonaerense para mayor precisión.

Fue la ubérrima capa vegetal del Valle Central de Chile el asiento inicial —y siempre el principal— de la oligarquía rural. Cuando cae la Araucanía, algunas de las tierras nuevas también le pertenecerán.

En los tres países, la frontera económico-social dentro de la cual surgirá la estructura nacional de clases había quedado trazada hacia fines del siglo XIX. Fue obra, en parte, de la iniciativa empresarial; en parte, del despojo con la activa complicidad del Estado. En los tres países, la ley y los cuerpos represivos tuvieron que limitar la posesión tradicional del suelo y los movimientos del hombre rural para que éste se viera forzado a transformarse en mano de obra asalariada de la nueva empresa rural. Pero la magnitud de la población original despojada fue mayor en Chile, porque gran parte del suelo pampeano y de las cuchillas orientales tenían, cuando se produjo la gran expansión de la nueva frontera, muy baja densidad demográfica. La población de más antigua raigambre rural y mayor densidad en Argentina se encontraba fuera de la zona pampeana —en el noreste, antesala de la gran familia quechua—; mientras en la Banda Oriental jamás había habido, ni en la prehistoria, una densidad siquiera mediana.

Como consecuencia, la población que se transformó en flotante fue relativamente más numerosa en el Valle Central y en la Araucanía chilenos que en la pampa húmeda y las cuchillas orientales.

La nueva producción rural en Uruguay y Argentina fue extensiva. Poquísimas manos de obra se necesitó para producir lana; un poco más, vacunos; un poco más, cereales; un poco más, vegetales para el consumo de los núcleos urbanos. En cambio, la agricultura de riego del Valle Central y, particularmente, la cultura de la vid y la industria semirural del vino fueron

mucho más intensivas. En el perímetro de la nueva producción, los sectores rurales populares eran relativamente más numerosos en Chile que en Argentina y Uruguay. La consecuencia fue, en términos relativos, que la nueva economía produjo más pobres en el campo chileno que en el rioplatense.

Pero no está allí todo el origen de las diferencias en el nivel de vida. Chile fue gran productor minero desde la Colonia y siguió siéndolo durante los siglos de la República. Los productos principales que volcó en el mercado mundial fueron de origen minero: carbón, salitre, cobre, en sucesión cronológica de importancia que no excluye la simultaneidad de la producción. La zona pampeana y las cuchillas orientales produjeron carne vacuna, lana y cereales para vender en Europa. De esos productos, la carne y el cereal, altamente refinados por hibridación, son alimentos de primera categoría, con los cuales se pagaba en parte el salario y se proveía a la alimentación de toda la población de la zona, debido al bajo costo de producción. Inclusive, la carne —aunque la de ganado criollo— no dejó de ser bien mostrenco hasta ya entrado el siglo XX.

A menor riqueza que repartir, mayor rigidez de la estratificación social. La distancia social entre las clases fue mayor en Chile que en el Río de la Plata. En Chile, la fuente de ingreso externo de mayor importancia era la colocación de la producción minera en el mercado internacional, pero en el periodo que observamos ya está en manos del capital extranjero y, salvo una minería nacional de pequeño volumen total, es el Estado el que percibe directamente una cuota por la concesión. El control de esa cuota origina incesantes luchas entre los sectores de la clase dominante y explica muchos acontecimientos de la historia política.

3

LA. CLASE, EL OBJETIVO Y LOS INSTRUMENTOS

No debiéramos hacer aquí historia de la estratificación, sino perfilar ideologías; pero es que la génesis de una estructura nacional de clases sociales ya tiene el germen de la ideología nacional que la clase dominante impondrá —o intentará imponer— al conjunto de la sociedad.

Es en los lustros finales del siglo XIX cuando las tres oligarquías se configuran tal como se las verá actuar y gravitar hasta la segunda guerra mundial. En Chile y Argentina ese límite en el tiempo está dado, en buena parte, por la ocupación del territorio indígena del sur, que es incorporado al espacio productivo de la nueva economía capitalista. En Uruguay hay un

margen claro entre 1876 y 1880, durante el gobierno de Latorre, cuando se alambran los campos, se institucionaliza la defensa de la propiedad terrateniente y se persigue a la población rural libre, obligándola a ingresar como asalariada del latifundista o a emigrar hacia los núcleos urbanos.

Pero en los tres países, la gran propiedad rural ya venía creando, desde las postrimerías de la Colonia, un conjunto de familias con intereses bien diferenciados; sólo que, mientras en la pampa argentina y en el Valle Central chileno esa continuidad logra crear una verdadera clase social, semirural y semiurbana, en Uruguay la función tan predominantemente comercial de la gran capital y la productiva apenas incipiente del campo, así como las guerras civiles incesantes, retardaron la configuración de un núcleo de intereses económicos del sector primario y de un conjunto de propietarios rurales con verdadero poder de clase nacional. Cuando se inicia el siglo XX, la oligarquía del Valle Central y la de la pampa bonaerense tienen una cohesión y una presencia de clase mucho mayores que la de la planicie ondulante de la tierra oriental.

La guerra contra la población indígena del sur no sólo entregó tierras enormes y valiosas a los propietarios de piel más blanca en Chile y Argentina, sino que puso en movimiento dos mecanismos que nos interesa señalar: por una parte, amplió las filas de la propia oligarquía, porque a ella se incorporaron pronto nuevos propietarios de tierra que se iban a beneficiar, directa o indirectamente, del saqueo en perjuicio de la población indígena; por otra, delimitó ya definitivamente los intereses de dos clases poderosas y las estimuló a idealizar la conquista del espacio útil como destino inevitable de un conjunto, ya numeroso, de familias de otro origen étnico, capaces de multiplicar las riquezas y organizar la sociedad toda. Nada de esto hubo en Uruguay, porque las agrupaciones tribales de americanos cazadores o con agricultura itinerante que encontraron los conquistadores españoles habían desaparecido tempranamente del suelo oriental, ya sea por la muerte bajo el arcabuz alevoso, o por emigración forzosa quién sabe si al sur o al norte.

Las guerras ayudan a definir a veces los contornos de la clase vencedora. Esto ocurrió en Chile y en Argentina no sólo con la que se lanzó contra los indios, sino con otras dos, proyectadas ambas casi simultáneamente contra naciones vecinas: en Chile, la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884, que permitió a ese país retener Tarapacá y Arica a costa de Perú y el litoral boliviano sobre el Pacífico; en Argentina, la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay desde 1865 hasta 1870. La oligarquía del Valle Central chileno pasó a administrar la gran riqueza del salitre del norte árido, cuyo beneficiario principal resultaron los intereses británicos. La oligarquía bonaerense no recibió,

fuera del negocio especulativo que acompañó a la guerra, ninguna fuente de ingresos importantes por la aventura militar en el Paraguay. Pero las dos guerras se incorporaron, en forma de poema épico bastante grotesco, al argumento —repetido hasta el hartazgo en las escuelas primarias— de la ideología oligárquica en gestación. En Chile, sirvió para comprobar la superioridad racial de los descendientes de vascos frente a la gran masa indígena boliviano-peruana, con lo cual se daba por demostrado el destino manifiesto de los que se llamaron a sí mismos "los británicos de América del Sur". En Argentina, el genocidio del pueblo paraguayo ingresó en el incipiente credo nacional como glorificación de un destino de progreso.

Uruguay no padeció de este mal, porque su papel en la Triple Alianza fue muy secundario y ningún grupo social intentó transformar la aventura militar indigna en motivo de orgullo colectivo.

Si tratamos, en fin, de delimitar la personalidad de una oligarquía antes de comprender su propuesta ideológica, nos es indispensable advertir que una clase social nunca se comprende sin comprender a las otras que actúan dentro del mismo sistema estratigráfico. Pero no podemos en este ensayo breve trazar el cuadro integral de la relación de clases en cada caso nacional, sino apenas localizar algunos factores que sí nos interesan más directamente para nuestro tema.

De las tres oligarquías, fueron la argentina y la uruguaya las que, al enriquecerse a sí mismas, aseguraron al país un éxito económico mayor. De ese punto de partida surge, precisamente, la formación de burguesías urbanas y clases medias que en los dos países del Plata hacen menos visible el predominio, real, de las oligarquías rurales en lo económico. A la inversa, de las tres oligarquías, fue la chilena la que desarrolló mayor habilidad en el manejo político, del cual dependió siempre su status económico, mientras que la uruguaya fue la más alejada de las decisiones políticas inmediatas y más circunscrita a la administración de un tipo bastante elemental de intereses empresariales.

La función que la clase le atribuye a la ideología nacionalista en estos tres casos se reitera en lo esencial, que es la creación de un universo ideal de coincidencias, suficientemente importantes éstas como para asegurar el destino nacional sin perturbaciones internas y dotadas, a la vez, de un poder de censura tal que permita localizar con claridad al enemigo dentro de las propias filas. Ya veremos cómo se va definiendo ese campo de coincidencias en cada país. Por ahora, advirtamos que ese esfuerzo por construir una ideología nacional, aceptable para todas las clases, tiene en los tres casos mayor complejidad que la que pueda encontrarse en sociedades elementales precapitalistas, pero no llega a adquirir un nivel

cultural realmente complejo. Se queda en la categoría de programas muy generales, que no reivindican nada excesivamente peligroso, ni afirman ningún valor excesivamente complejo.

Aclaremos que la meta que una clase trata de imponer a todas las otras puede ser creación directa de algunos de sus miembros, o puede no serlo. Nos interesa saber cómo ocurrió en la realidad, porque el episodio puede decirnos algo sobre el tipo de control social que ejerce la clase dominante. Es muy probable que si hiciéramos una compulsa del origen social de políticos e intelectuales de la época encontraríamos que en Chile hay en esas profesiones mayor proporción de miembros de familias oligárquicas que en Argentina; y en Argentina que en Uruguay. Pero existen otros terrenos del control cultural que nos interesa señalar.

Tanto en Chile como en Argentina es muy ostensible, desde los primeros años del siglo XX, la presencia de una intelectualidad que elabora la justificación histórica y la meta nacional de la oligarquía, aunque en Argentina el origen social de la mayor parte de los miembros de esa intelectualidad está alejado de la clase dominante. Pero en Chile, más que en Argentina, el contenido de la enseñanza universitaria y el status social de las profesiones de ese nivel contribuyeron poderosamente a crear en sus miembros una mentalidad estrechamente oligárquica, muy propicia para aceptar como propio cualquier programa que procediera de la verdadera oligarquía dominante. En Uruguay, en cambio, esta modalidad estuvo circunscrita a círculos mucho más reducidos y menos influyentes.

Los vehículos de la difusión ideológica presentan también algunas modalidades importantes en la etapa histórica a que nos referimos. En el conjunto de la población de los tres países debe haber habido, durante todos esos años, algo así como un 50% de analfabetos y semianalfabetos; pero en las zonas donde el control cultural fue más directo esos porcentajes disminuían bastante. No eran tiempos de televisión, ni la radiotelefonía tuvo difusión masiva antes de 1930. Pero una proporción importante de aquellos que, ya en edad adulta, desembocaban en los mecanismos productivos y en la actividad social que podemos considerar decisivos dentro de las estructuras nacionales, pasaba por la escuela primaria y, en proporción mucho menor, por los otros escalones de un sistema educacional completo, que en los tres países del cono sur de América se organizó mucho antes que en otros del continente latinoamericano.

La Iglesia católica no fue en esos tres países tan poderosa ni tan unánimemente aceptada como en tantos otros latinoamericanos. En Argentina fue débil hasta después de 1930 y en Uruguay perdió gran parte de su gravitación social y cultural con las reformas de Batlle y Ordóñez. Pero, aunque en escalas diferentes, en los tres países tuvo, durante todo el periodo que analizamos, suficiente poder como para dejar un sello de acatamiento en las actitudes de

una parte de los adultos, con el consiguiente voto de censura sobre el rebelde. Pese a algunos conflictos estridentes entre el poder temporal y el eclesiástico, no hubo en realidad escisión de fondo en ninguno de los tres países entre Iglesia y clase dominante. Más aún, cuando varias iglesias cristianas no católicas comenzaron a expandir su feligresía entre masas pobres, fomentaron en ellas —más activamente que la Iglesia católica— una actitud de indiferencia frente a los conflictos sociales y de acatamiento a los valores impuestos por las clases dominantes.

4

LOS TRES NACIONALISMOS OLIGÁRQUICOS: EL CONTENIDO

a. La relación de las fuerzas políticas y la distribución del poder

Como es en el perímetro del poder político donde las clases sociales terminan de definir la propia personalidad y de distribuir los campos de acción y predominio, tenemos necesariamente que evocar el cuadro político que corresponde a cada una de las tres oligarquías y que se conecta muy directamente con la gestación del programa ideológico que tratan de proyectar sobre el conjunto de la sociedad.

Las tres se encuentran al comenzar el siglo XX en vías de consolidar su amplio dominio de la estructura productiva nacional. Mantienen el control del aparato de distribución de la propiedad rural, a pesar de que ya está operando en los tres países el mercado inmobiliario y de que a los tres' llegan ya corrientes de inmigrantes europeos ávidos por obtener la propiedad de la tierra. Las tres oligarquías encontrarán procedimientos muy eficaces para limitar los efectos del mercado y deslindar la parte del espacio rural en la cual se permitirá a los nuevos inmigrantes que se transformen en propietarios del suelo. Con la temprana corriente urbanizante —subproducto de la forma y el ritmo de ocupación de la zona productiva, así como del tipo de producción primaria que se desarrolla—, con la expansión del incipiente mercado interno y con las nuevas funciones sociales que se atribuye a los egresados del sistema educativo estatal, hacen su entrada los nuevos sectores sociales: el asalariado manual urbano y rural, el pequeño empresariado urbano, una extendida capa artesanal urbana, la clase media profesional, el mediano empresariado rural, numeroso éste y con cierta importancia política en Argentina, aunque presente también en Chile y Uruguay.

En los tres países, la proyección política de esos nuevos sectores comienzan a dibujarse tímidamente en la década de 1890 y es ya decisiva en la de 1920. Es como consecuencia, en

primera o segunda instancia, de esa reestructuración social que llegan a la presidencia Arturo Alessandri en Chile en 1920, Hipólito Yrigoyen en Argentina en 1916 y José Batlle y Ordóñez en Uruguay en 1903.

En Chile y Argentina, la acción política de las clases populares y la de los sectores medios obligaron a las oligarquías a crearse estrategias de coexistencia a largo plazo, que por momentos fueron de difícil gestación y aplicación, quizá más en Argentina que en Chile. Las oligarquías tuvieron que aprender a compartir el poder político, y en ciertas coyunturas, a cederlo (aprendizaje éste siempre difícil en toda la historia de las sociedades estratificadas), en una especie de incesante entrada y salida de los puestos más ostensibles del mando.

Hay diferencias entre ambos países. Como la economía argentina resultó más expansiva que la chilena y debido, particularmente, a que el eje del nuevo sistema productivo estaba formado por alimentos básicos, todo este prolongado y alternante juego político se fue desarrollando, hasta la segunda guerra mundial, con un trasfondo de crecimiento sostenido — aunque atenuado después de 1930— y buen nivel de vida en la zona pampeana, que era, en definitiva, donde se decidía la política nacional. Argentina tuvo estabilidad institucional hasta 1930 y después, entre vergonzante e insegura, hasta 1943. Chile también, con entreactos de fuerza que se corregían con una reiterada tendencia a regresar a la norma constitucional. Pero como Chile tenía menos ingresos que repartir, su estructura social fue más rígida y las pautas generalizadas de la conducta social más directamente dirigidas a mantener con notoriedad las líneas de clase. Las dos fueron en este lapso, en verdad, repúblicas señoriales. La diferencia fundamental consistía en que en Argentina se conformó una estructura social más abierta y dinámica, con ricos más ricos que los chilenos pero con pobres menos pobres en la zona pampeana y, sobre todo, con una multitud de recién llegados a todo: extranjeros por millones e hijos de extranjeros que tenían a su cargo todo el comercio, las artesanías y la industria, casi todas las profesiones universitarias y casi toda la administración pública.

Uruguay en cambio, durante todo el siglo XX, nunca fue una república señorial, sino algo muy diferente. Los estancieros de ganado lanar y de vacuno —que hasta fines del siglo XIX tuvieron que compartir la decisión política con el jefe montonero, que a menudo no era más que un estanciero que se cobraba en tierra y ganado la derrota que le infligía a otro colega, o bien un general improvisado que aspiraba a transformarse en estanciero como quiera que fuera y a corto plazo— se encontraron, ya en el siglo XX, que los sectores sociales urbanos (los comerciantes, los empleados y los doctores) y también los chacareros gringos de Canelones compartían auténticamente con ellos, por propio derecho, las decisiones políticas

de fondo.

Había antiguos elementos estructurales que conducían a eso. Desde el siglo XVIII, la Banda Oriental había sido una gran ciudad-puerto y una campaña semidespoblada, con muchos más comerciantes y funcionarios que trajinadores de cueros. Después, la producción primaria extensiva no condujo al crecimiento relativo de la población rural, sino que impulsó el proceso de urbanización más temprano y acelerado que se ha registrado en todo el Continente Americano, hasta llegar al límite del 85% aproximadamente de población urbana en los últimos años. Cuando se acabaron los levantamientos de los caudillos rurales, coincidiendo con el ocaso del siglo XIX, ya no hubo más tropa política en la campaña, mientras en Montevideo iba apareciendo, con el crecimiento vegetativo urbano y, muy particularmente, con el aporte inmigratorio, la masa política más decisiva de todo el país.

Parecería que los estancieros hubieran entregado el poder político sin resistencia. Lo que ocurrió fue que la entrada de la gran masa urbana en el terreno de las decisiones políticas fundamentales se hizo sin dañar en lo más mínimo la fuente de ingresos de los estancieros, cuidadosamente respetada por la reforma de Batlle y Ordóñez y que, además, no cesaba de ampliarse en aquellos decenios como consecuencia del alza de los precios de los productos agropecuarios en el mercado internacional hasta la crisis de 1929. La oligarquía terrateniente oriental aceptó pasivamente la nueva realidad política del siglo XX porque a la vez ampliaba sus riquezas como clase. Agreguemos en fin que, a medida que el siglo transcurría, la oligarquía rural invertía en negocios bancarios, comerciales e inmobiliarios urbanos — incluyendo ese rubro inagotable que fue el desarrollo de los nuevos balnearios sobre las costas fluvial y oceánica— y, también por esa vía, aprendió la nueva técnica del juego político desarticulado y se dejó oír, como actor importante, en las infinitas combinaciones electorales.

Hubo otros factores que contribuyeron con vigor a configurar lo que la estructura social tuvo de particular. La reforma de Batlle y Ordóñez, que introdujo el primer sistema de seguro social en América y la coparticipación permanente de los dos grandes partidos —y sus múltiples subgrupos— en los órganos del poder político y de la administración, no sólo creó las condiciones para la coexistencia pacífica de las ideas y de las definiciones partidarias, sino que eliminó de raíz los limitantes tradicionales de esa coexistencia pacífica: le quitó en efecto poder político a la Iglesia católica y eliminó casi por completo al conjunto de los aparatos armados represivos. Esto último tuvo una importante incidencia financiera y fue una de las condiciones que permitieron sustentar el amplio y temprano sistema de seguro social popular.

Fue así cómo, mientras Chile y Argentina se organizaban al modo de repúblicas señoriales,

con el consiguiente e indispensable andamiaje represivo a base de gravosos institutos armados —si bien más abierta la estructura social argentina que la chilena—, Uruguay pasaba a ser, durante los primeros cincuenta años del siglo XX cuando menos, una democracia civil en la cual la conversación era el único instrumento político viable.

b. *Definición por exclusión*

Como la autoidentificación de las clases sociales, también los credos nacionales elaborados por las clases dominantes comienzan a construirse a partir de la exclusión. Lo que queda fuera es el enemigo, real o imaginario. También los valores y las interpretaciones son potencialmente peligrosos.

La frontera estatal sirvió tempranamente para localizar a los primeros enemigos. Este tipo de definición fue muy activo en el nacionalismo oligárquico chileno: Perú fue, desde el primer momento, el enemigo castigado; Bolivia, el vecino despreciado por su etnia y su atraso material; Argentina, la amenaza permanente de la codicia territorial. Algo de psicología insular hay en esto: Chile en efecto tiene, en relación con su superficie, más fronteras territoriales y oceánicas que las que una organización estatal puede, bajo cualquier condición, defender y ni siquiera vigilar. Es cierto también que el nacionalismo oligárquico argentino amenazó muchas veces la frontera andina y atacó esporádicamente no pocas. Pero lo demás lo hizo por su propia iniciativa el nacionalismo oligárquico chileno, que encontró en esta vena un modo fácil y casi infalible de convocar voluntades cuando los conflictos internos se agudizaban.

Para la Argentina, el planteamiento oligárquico tuvo un condicionamiento algo diferente. El peligro en la frontera chilena fue aplicado con el mismo mecanismo de compensación política entre fines del siglo XIX y muy a principios del XX, pero después no concitó ya más el sentido de riesgo que le hubiera sido indispensable. Bolivia estaba demasiado lejos de Buenos Aires —no de Jujuy, que era su continuación cultural, pero es que Jujuy estaba tan alejado de Buenos Aires que parecía no existir— y, en cuanto al Paraguay, la leyenda del heroísmo argentino en el genocidio del setenta se extendió, sobre todo por la vía de la escuela primaria, hasta muy entrado el siglo XX, pero fue imposible hacerles desempeñar a los paraguayos, en la imaginación popular argentina, el papel fantasmal de amenazantes. Del otro país vecino, el Uruguay, ni hablar porque desde la Colonia las conexiones familiares, el fácil acceso y la identidad total de aspecto físico, entonación y hábitos culturales habían unido a los dos pueblos de modo indestructible. Brasil en cambio sí fue el enemigo militar potencial y

el punto de referencia óptimo porque se le decía sumido en el atraso más generalizado, mientras que la Argentina de las vacas y el trigo prosperaba a la luz del sol.

Uruguay, en cambio, no tuvo fronteras en función de las cuales definir su política nacional. Su norma internacional incorporó tempranamente, como principio tradicional, el equilibrio entre los dos vecinos más poderosos; pero la oligarquía nativa no intentó transformar a los vecinos, ni le hubiera sido posible, en convocatoria para la unidad de los intereses nacionales. Más bien hubo cierta indiferencia ante ellos.

El otro elemento de definición de lo nacional por exclusión en el credo oligárquico se presentó con un contenido racial. La oligarquía chilena se decía de origen vasco y castellano, con abundante aporte de sangre germana y británica: piel blanca y pelo rubio (aunque notoriamente había demasiados oligarcas y doctores con piel cetrina y pelo negro). Lo indio era lo repudiable, lo contrapuesto al progreso y a la civilización. El argumento apareció también con fuerza en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y perduró, cuando menos, hasta la década del 30 del siglo siguiente. El orgullo de constituir un país blanco, con origen europeo, impregnó la enseñanza pública en Argentina durante varias generaciones e hizo olvidar que desde Córdoba hacia el norte del país se nacía del color del cobre, las mejillas se ensanchaban y los ojos se rasgaban.

Uruguay tuvo, también, su orgullo de ser blanco y europeo —de lo cual pudo haberse jactado con mayor asidero en la realidad que Chile y Argentina— pero fue ése un destello tan fugaz que no dejó más huella que alguna prosa periodística insustancial.

c. Definición por inclusión

Aristocratizante por origen y por necesidad, un credo nacionalista oligárquico no puede ir muy lejos en las condiciones que ponga a la inclusión de sus elementos integrantes. Sólo cuando coinciden circunstancias históricas muy favorables —como una prolongada expansión del sistema económico, una afortunada y rápida ocupación de territorio con escaso precio de sangre— puede rendir frutos el procedimiento que consiste en colocar bajo un denominador común a varios elementos heterogéneos.

Uno de esos elementos, presente durante varios decenios en los casos de Chile y Argentina, sólo podía ser aceptado admitiendo la paradoja inexplicada que acabamos de mencionar: los dos nacionalismos basaron el orgullo nacional en la pertenencia a la raza blanca y la cultura occidental. Más asidero lógico tenía una definición de este tipo en la zona pampeana, casi desierta cuando comenzaron a llegar los inmigrantes europeos. Pero ni

Argentina era sólo zona pampeana, ni en Chile podían, con sensatez, proclamar su orgullo de pertenecer a la raza caucásica pura esos muchos oligarcas, o admiradores de la oligarquía, portadores de caudalosa sangre mestiza. Sin embargo, este ingrediente de 1ª ideología nacional oligárquica actuó con mucha fuerza y tuvo expositores múltiples, capaces de lanzar cualquier disparate histórico o teórico con incommovible seriedad, a causa de lo cual recibían, en Chile y Argentina, el aplauso de las academias y de la prensa periódica.

Una definición así de blanquismo europeizante se forjó también como rebuscado contraste contra el resto de América Latina, a la que se suponía pagando con su atraso la tara racial de origen. Chile era entonces para los chilenos de cultura oligárquica y Argentina para los argentinos bajo signo cultural similar, los modelos del progreso tipo europeo, gobernados ambos por razas vigorosas y activas, que sabían distinguir entre las técnicas civilizadas y la abulia de las razas vencidas por la historia.

No deja de ser curioso que este elemento del credo nacional oligárquico en Argentina haya dejado fuera del cuadro —como ya lo hemos observado— a toda la población del noroeste; pero la verdad es que esa exclusión nunca se hizo expresamente. Hubiera resultado contradictorio con el aura de integralidad y de igualdad civil, que también fueron elementos formativos, a igual título, del credo nacional. Al fin y al cabo, se trataba de una ideología construida para que todos, sin excepción, se sintieran orgullosos de la pertenencia nacional.

La igualdad de oportunidades va unida a la convicción de que el país progresa —y progresará— incesantemente. Los "británicos de América del Sur", como la oligarquía llamaba a los chilenos (por generosa extensión de su propio apelativo), se equiparaban a esos argentinos de 1910, ninguno de los cuales debería —en sana lógica patriótica— haber dudado un instante de que el país se transformaría en una de las grandes potencias mundiales en un plazo histórico brevísimo. Veinte años a lo sumo; o quizá diez, o cinco. En los dos casos, se trataba de la raza blanca que, instalada en el cono terminal del Continente Americano, se proyectaría hacia el resto del planeta.

Esta fe en el progreso material resultó más convincente en Argentina que en Chile, porque los signos exteriores eran más visibles en aquélla y porque el nivel de vida popular avanzaba también con mayor fuerza. Pero en ambos países es un elemento importante de la ideología de la época y está relacionada estrechamente con el axioma de la igualdad de oportunidades, que es a la vez, en el terreno de una lógica discursiva, el argumento más convincente para neutralizar cualquier intento de rebeldía contra el sistema o de simple protesta individual por la postergación.

La idea del progreso no se concilia fácilmente con un tradicionalismo conservador y quizá

por eso no aparecen ambas postulaciones en Argentina como complementarias hasta muy avanzada la década de 1920 (cuando el progreso había sufrido tropiezos muy serios a causa de gente que no creía en ningún tradicionalismo conservador, porque no tenían ninguna tradición que conservar). Pero todo hace pensar que la oligarquía chilena fue más tradicionalista que la argentina entre fines del XIX y comienzos del XX. Y quizá haya tenido razón —la razón de una aristocracia— porque sus filas eran más estrechas para entonces y su acceso más difícil que la bonaerense, donde todavía aparecían enriquecidos de última hora reclamando un asiento privilegiado. Lo que fue sin duda considerablemente más fuerte en Chile que en Argentina fue el paternalismo señorial, que en Argentina sólo pudo ejercitarse plenamente en las grandes estancias de ganado vacuno de la zona pampeana, porque en las chacras el peón criollo no estaba en condiciones psicológicas de dialogar sino de igual a igual con el chacarero gringo, que todavía ni siquiera se expresaba bien en el idioma nacional, era incapaz de "sofrenar un potro" y tomaba el mate con variantes francamente inaceptables. En Chile, el paternalismo de ese tipo fue la única atenuación que podía ofrecer el marcado señorialismo de la estructura social, que transformaba a todos los dependientes en deudores de la gracia del superior.

Estos elementos del credo estuvieron también presentes en la Banda Oriental, pero todos en dosis homeopáticas. Se manifestaron, más bien, como valores rurales, en un país en el que la ruralidad perdió importancia cualitativa y cuantitativa antes que en ninguna otra parte del Continente Americano y en la más extrema medida. En la gran ciudad gringa recostada sobre el Río de la Plata que era Montevideo —el porcentaje de cuya población sobre el total de la población nacional fue, desde principios del siglo, el más elevado de toda América—, la estructura social que se levantaba parecía partir del cero absoluto. Los nuevos contingentes de inmigrantes pobres que llegaban cada año se incorporaban a un clima de convivencia cosmopolita, con una economía en expansión, un amplio seguro social, un Estado que repartía empleo público abundante entre los que no podían, o no querían, encontrarlo en el sector privado, una Iglesia debilitada y la ausencia casi total de aparato represivo. Además, en lo económico, operaba un mecanismo de compensación de las limitaciones del mercado interno de trabajo que actuó con excepcional eficiencia durante medio siglo y cuya importancia no ha sido observada por los economistas: la ciudad de Buenos Aires, capital de un país que tenía diez veces más población que la Banda Oriental y que se encontraba asimismo en la etapa más expansiva de toda su propia historia, ofrecía empleo a los uruguayos, sin ninguna exigencia de documentación y sin ningún impuesto sobre los ingresos, en la gama ocupacional más amplia imaginable, desde el estacional hasta el permanente y desde

camarero de bar hasta funcionario de un ministerio y profesor universitario. Sobre ese sustrato fue apareciendo una escala de valores urbanos, mucho más consuetudinaria que estatuida, sin asomo de acento épico ni convocatoria alguna para empresas de titanismo. Una escala de valores en la cual la violencia estaba ausente (porque no había aparato represivo y porque la prédica de la represión subjetiva era apenas una voz entre tantas) y lo político se disolvía insistentemente en lo individual, en una interminable conversación de individuo a individuo, que era el mecanismo básico de las decisiones, tanto en la rueda del café como en el escalón superior del gobierno.

d. La zona de penumbra

Los valores —ya se sabe— no son absolutos, aunque un, clase dominante aspire siempre a transformar en absoluto los que ella cree, o herede, y que pueda aplicar para su propia sustentación. Cambian de contenido y de objetivo, partir de un planteamiento que parece el mismo. Además surgen otros, inesperadamente, en los cruces de camino, en los episodios difíciles, en los conflictos agudos. Algunos de éstos se pueden olvidar pronto; pero otros quedan y hay un manifiesto intento por parte de la clase dominante de incorporarlos como elementos de definición de lo nacional ante una realidad que ha cambiado, entrando por sendas más ambiguas y oscuras. Al fin y al cabo, Chile y Argentina tuvieron luchas de clases intensas, sindicatos revolucionarios, partidos obreros e intelectualidad de izquierda desde fines del siglo XIX. Uruguay tuvo algo de todo, pero en un contexto mucho menos conflictivo.

No fueron numerosos los valores cambiantes que bien podríamos incluir en esa zona de penumbra, pero sí resultaron altamente significativos, porque cada uno de ellos, en su modo diverso de expresarse y hasta en el cambio operado en la situación y la necesidad que le dieron origen, expresó la definición concreta de una clase en conflicto ante una problemática también concreta.

Lo que aparece como valor nuevo —o, más bien, como replanteamiento ambivalente, sin negar lo anterior— es la reacción muy directa frente a la amenaza de una masa anónima, que comenzaba a reclamar derechos en otro estilo sin compartir a menudo los valores básicos de la nacionalidad según los enunciados del credo. Una masa acompañada de intelectuales cuyas postulaciones se apartaban a veces radicalmente de la ideología admitida, o bien exigían una reforma radical con fundamentación tradicionalista.

Tanto en Chile como en Argentina, el exogrupo fue culpable de todo. Revivió así el

antiguo argumento en los conflictos entre comunidades. Pero en la argumentación oligárquica el exogrupo fue un fantasma con especificidad mayor en Argentina que en Chile: era en Argentina, en efeco, de formación más reciente y de ubicación geográfica más fácil, como que se trataba de la masa de inmigrantes europeos pobres que se acumulaba en la zona pampeana y, muy particularmente, en sus grandes centros urbanos, desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca en el sur, hasta Rosario en el norte y hasta Córdoba en el oeste. Confundidos dentro de esa masa popular iban también los intelectuales rebeldes —los anarquistas, los literatos pobres, los agitadores de ideas extrañas, los socialistas organizadores de sindicatos y bibliotecas plurilingües—, hijos los más de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos; los menos, bien argentinos por lejano origen familiar y hasta con apellidos aristocratizantes.

Cuando la culpabilidad se enfila hacia el exogrupo, lo foráneo pasa a ser lo culpable y es así como ya estamos plenamente en esa zona de penumbra, en la cual los valores oligárquicos van a cambiar de contenido y el gran credo nacional argentino va a estar compuesto de palabras que tienen significados contradictorios. Las fiestas del Centenario se celebraron en 1910 con efluvios de confraternización de razas, religiones y clases sociales (en discursos oficiales y en una serie de libros sorprendentemente numerosa, todos cuyos autores, de la más variada procedencia partidaria, repetían con pasión el mismo credo nacional de la oligarquía), pero desde 1904 había una ley de expulsión de extranjeros que establecía un procedimiento administrativo sumario, al margen de todas las garantías prescritas en la Constitución. Nueve años después del Centenario, en un enero sangriento, el país presenciaba su primer pogrom: un grupo de jóvenes atildados, hijos legítimos de la oligarquía, enrolados en la flamante Liga Patriótica Argentina, invadió el barrio judío de Villa Crespo, golpeó a ancianos con barba blanca y arrojó a las calles los enseres de obreros que hablaban idisch, a quienes suponía promotores de la huelga de los talleres Vasena, que había degenerado en duras luchas callejeras contra la policía primero y después contra el ejército mismo.

Cuando se trataba de construir una sociedad dinámica y rica a partir de una tierra desocupada, el europeo recibió la bendición de la convocatoria constitucional y, por ser europeo y de piel blanca, el credo oligárquico lo admitió con el status, nada despreciable, de gestor de la grandeza nacional. Al advertirse que los que formaban sindicatos rebeldes y combatían contra las fuerzas represivas durante las huelgas eran, precisamente, obreros europeos de piel blanca —y muchos de ellos, apenas iniciados en el idioma español, a tal punto que sus periódicos eran bilingües—, el espectro de la anti-etnia apareció súbitamente y sin mayor reparo. Así fue como esos años inmediatamente anteriores y posteriores al Centenario —cuando lo que se celebraba a pulmón lleno era, precisamente, la integración de

todas las nacionalidades en una nueva y pujante— fueron también los que presenciaron el despertar de una suerte de lirismo de lo nacional, pero definido no por inclusión sino por exclusión: el ser *nacional* era lo que debía afirmarse como propio y auténtico, ante el peligro de un torrente foráneo que amenazaba con desdibujarlo y, finalmente, con hacerlo desaparecer. ¿Contradicción, acaso? En su formulación externa, sí; en su objetivo fundamental, no. Lo que predomina en los cánticos a la grandeza nacional en esas décadas iniciales del siglo XX es una escala de valores oligárquicos, que sólo admite lo extranjero como promotor de un esquema de organización social preconcebido. Pero el extranjero que se rebelde no sólo se hace pasible del castigo individual, sino que también hace surgir la teoría del diabolismo encarnado en el inmigrante que habla mal el idioma castellano y que, en algunos casos francamente extremos, hasta tiene una religión diferente, o no adora más que al espíritu del mal.

Si en Argentina este vuelco hacia el ostracismo público de la antietnia quedó ya bien definido en la década de 1920 fue porque, como hemos apuntado, la gran masa popular de la zona pampeana provenía de otros países y, sobre todo después de 1918, de los países europeos del Este, donde no se hablaban lenguas latinas, con excepción de Rumania. En Chile, el proceso fue bastante menos agudo y es probable que, en buena proporción, la reversión antietnia se haya dirigido principalmente contra la numerosa población mapuche que había iniciado la emigración masiva hacia el Valle Central e inclusive hacia el norte chico.

La reversión de valores no se justifica como derogación del gran principio, sino como adecuación ante la inesperada perfidia (la Argentina admite de buena fe a todos los extranjeros, pero ocurre que hay malos entre ellos que deben ser punidos o expulsados), con lo cual —digamos, sin asomo de sarcasmo— la escala de valores no se altera. Lo que ocurría era que el objetivo final, bien demarcadamente oligárquico, había sido enunciado antes sólo a medias.

No resultó ése el único de los valores del credo nacional que mudó de rostro en la penumbra de los conflictos entre clases. Debemos también señalar que fue en esa década de 1920 cuando, a consecuencia de los mismos problemas, el liberalismo comenzó a perder su prestigio. Había sido admitido como complemento filosófico útil —y hasta elegante— mientras sólo podía interpretarse como el derecho de cada quien a opinar lo que le diera la gana y el derecho de cada empresario a proceder como quisiera sin que el Estado interfiriera. Pero comenzó a resultar inconveniente cuando, en la década del 20, los que opinaban con mayor estridencia eran —nada menos— los anarquistas, los sindicalistas y los socialistas; y,

en la década del 30, cuando la gran empresa privada de la época requirió la intervención del Estado para salvarla de las consecuencias de la crisis internacional. El tránsito filosófico del liberalismo positivista —y hasta agnóstico— del Centenario al antiliberalismo a partir de 1925 (antiliberalismo reforzado por una reivindicación hispanista y católica) no fue una abdicación de los objetivos del credo nacional de la oligarquía, sino una readaptación de la postulación filosófica del mismo credo para hacerla más coherente con los objetivos permanentes e intocables. Fue en núcleos numéricamente reducidos de jóvenes doctores, hijos —o sobrinos— de la oligarquía, y de jefes militares de definición política oligárquica donde se produjo la conversión de los valores que mencionamos; es decir, del liberalismo cosmopolita al antiliberalismo católico e hispanizante.

5

LOS TRES NACIONALISMOS OLIGÁRQUICOS: UNA AUSENCIA NOTORIA

En 1889, cuando el gobierno de Estados Unidos convocó la primera conferencia panamericana, el de Argentina designó como sus delegados a Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana, jóvenes partícipes ambos de la avanzada aristocrática de la época (como que los dos llegaron a la presidencia de la nación y desde hace cuarenta años ningún porteño que se precie habrá dejado de caminar lentamente muchas veces por las calles del barrio más rico de la ciudad desde la Avenida Sáenz Peña hasta la Avenida Quintana). Fueron a Washington los improvisados diplomáticos desde París —para mejor definición de su prosapia— y allí mismo, en la sede del naciente poder imperial, produjeron, con sus discursos y sus desplantes personales, un verdadero escándalo antimperialista, que llamó poderosamente la atención de José Martí.

Es muy probable que en la historia del predominio político de las tres oligarquías del sur, ésa haya sido la más estruendosa expresión de antimperialismo. La avanzadilla política e intelectual de la oligarquía bonaerense vivía entonces el arrebató del crecimiento sin límites (ni siquiera la primera crisis, la de 1890, se había insinuado aún) y gozaba también, por supuesto, del complacido aval del Imperio Británico.

La ardorosa defensa del honor nacional se volcó, en la época del dominio indiscutido de los regímenes oligárquicos de Chile y Argentina, hacia los vecinos sudamericanos; no hacia los grandes imperios. La oligarquía uruguaya, con menor grado de definición política en su credo nacional y más excluyentemente preocupada por la defensa de sus precios en el mercado internacional, tampoco produce, como es natural, ninguna definición

comprometedora frente a los colosos del mundo capitalista.

Es igualmente revelador que los movimientos autodenominados nacionalistas —civiles y militares— que surgen en Chile y Argentina desde la década de 1920 y que se emparentan, por lazos de sangre, de intereses y de ideología, con las oligarquías dominantes, sólo llegan a proclamar una ideología antimperialista como fórmula de remplazo de una sombra protectora por otra.

6

LOS TRES NACIONALISMOS OLIGÁRQUICOS: EL ÉXITO HISTÓRICO

Si el éxito histórico de un credo nacional se mide por su gravitación sobre el conjunto de la existencia nacional, por su aceptación —aunque tácita o, si se quiere, solapada— por parte de clases que no son las dominantes y por su perduración en el tiempo, es evidente que el más limitado correspondió a la oligarquía uruguaya. De las otras dos, es probable que haya sido la chilena la que usufructuó ese éxito histórico con mayor profundidad durante ese periodo que se prolonga desde los últimos lustros del siglo XIX hasta la segunda guerra mundial.

Más rica que la chilena, la oligarquía argentina extendió su dominación económica, política y cultural —con todos los paréntesis que se le puedan descubrir— durante todo el periodo que acabamos de indicar y aún goza del privilegio de la intocabilidad en materia económica. Tuvo también, como la chilena, una intelectualidad satélite que, en ciertas épocas, adquirió brillo, aunque nunca densidad de pensamiento. Pero la estructura productiva diferente generó un ordenamiento social más abierto, con un nivel de vida popular más elevado primero en la zona pampeana y después en el noreste y Cuyo, a lo que se agrega cierta temprana e inevitable actitud iconoclasta promovida por las caudalosas corrientes inmigratorias. Por todo eso creemos observar que el éxito histórico de su credo nacional, con ser prolongado y profundo, lo fue menos que el de la oligarquía chilena.

Uruguay es el otro extremo. El credo nacional oligárquico nunca salió del estado incipiente y siempre apareció demasiado confundido con un folklorismo elemental. Los valores dominantes en la sociedad oriental durante cincuenta años fueron fuertemente urbanos —de un urbanismo con industrias pequeñas y playas soleadas e inmensas— y predominantemente democráticos. Una democracia, como hemos dicho, sin fuerzas represivas, bajo la cual eso que los uruguayos llaman la dictadura de Terra en 1933 y el golpe de Estado de Baldomir en 1942 produjeron muchísimas menos víctimas populares que el régimen del presidente Yrigoyen, que fue incuestionablemente el más democrático de los gobiernos de la misma etapa en Argentina, y que esa tétrica cadena de expediciones punitivas que las fuerzas del

orden republicano señorial chileno lanzaron contra el pueblo desde el episodio de Santa María de Iquique a principios de siglo.

Fue Uruguay también, durante esos cincuenta años, el país de América Latina donde, a todas luces, más débil resultó la actitud nacionalista —entendida como orgullo de pertenecer a un país, pero a la vez como expresión de menosprecio o agresividad hacia otros países o comunidades étnicas o culturales— y más extendida y bien pensada la actitud antimperialista en la intelectualidad y en un vasto sector popular y juvenil.

Lo uno y lo otro están en estrecha relación con toda la problemática que hemos expuesto en este ensayo.